



Excmo. Ayuntamiento de XXX
Ilmo. Sr. Alcalde
(Palencia)

Asunto: Limpieza de vías y espacios públicos/ Deficiencias

Ilmo. Sr.:

De nuevo nos dirigimos a VI. en relación con el expediente que se tramita en esta Institución con el número **4963/2021**, referencia a la que rogamos haga mención en ulteriores contactos que llegue a tener con nosotros.

Como recordará, el motivo de la queja era la existencia de algunas deficiencias en el servicio de limpieza viaria que se presta en su municipio.

Según manifestaciones del autor de la queja, la zona del denominado “XXX” se encuentra llena de restos de basura, con las banderas situadas en sus mástiles rotas o desgastadas, creando una imagen de absoluta degradación del entorno.

Iniciada la investigación oportuna, se solicitó información en relación con las cuestiones planteadas en aquella.

Sin embargo, pese a haber reiterado nuestra solicitud de información inicial (que tuvo lugar con fecha 05/01/2022) hasta en tres ocasiones (18/02/2022, 25/05/2022 y 29/06/2022), no ha sido posible obtener una respuesta a la misma.

El art. 3.1 de la Ley 2/1994 de 9 de marzo, establece la obligación de todos los órganos y entes sujetos a la supervisión del Procurador del Común de auxiliarle en sus investigaciones, obligación en la que insiste el art. 16 de la misma Ley.

Ese Ayuntamiento ha incumplido este mandato al dejar de atender la solicitud de información y sus tres reiteraciones, motivo por el cual se ha acordado hacer pública la no colaboración en relación con el presente expediente en el informe anual que se presentará en las Cortes de Castilla y León y mantener su inclusión en el Registro de Administraciones y Entidades no colaboradoras con el Procurador del Común.

El incumplimiento de ese deber legal de colaboración, además de suponer una infracción legal, restringe el derecho de los ciudadanos a hacer uso de una garantía institucional de sus derechos y libertades.



Como le hemos recordado en otras ocasiones, es admisible que las administraciones sometidas a la supervisión de esta Institución puedan discrepar de los hechos expuestos en una queja concreta o no compartan los argumentos de una resolución formulada y aporten razones en sentido contrario, pero lo que no resulta aceptable es ignorar y, con ello, dificultar la función que corresponde a la Institución del Procurador del Común de Castilla y León como vía específica de defensa de los derechos de todos los ciudadanos, que es lo que provoca ese Ayuntamiento al no dar respuesta nuestras reiteradas solicitudes de información.

En cuanto al fondo de la cuestión planteada en este expediente, nos consta que con fecha 18/10/2021 se presentó ante esa Entidad local un escrito ciudadano al respecto, por ello debemos recordarle, como ya hemos hecho en otras ocasiones, que la garantía de la existencia de una respuesta efectiva al ciudadano deriva de la propia Constitución Española –artículo 103.1 y 105– y forma parte del derecho de la ciudadanía a una buena administración que configura el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, introducida por el Tratado de Lisboa.

En este sentido el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (al igual que ya lo hacía el art. 42 de la Ley 30/1992), recoge la obligación de las Administraciones públicas de dar respuesta expresa a cuantas solicitudes se formulen por los administrados. Por otra parte el artículo 69 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local –LRBRL– señala que “las Corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local”.

Resulta evidente, sin necesidad de efectuar mayores razonamientos, que la administración debe dar contestación formal a las pretensiones formuladas por los administrados (concretamente, en este caso, al escrito de fecha 18/10/2021) facilitando toda la información solicitada y de la que disponga por los medios que resulten procedentes.

En todo caso, la eventual denegación de lo solicitado debe llevarse a cabo mediante resolución expresa, debidamente motivada y personalmente notificada, con expresión de los recursos que frente a la misma resultasen procedentes.

En virtud de todo lo expuesto y pese a que no podemos contrastar lo que ha sido objeto de queja con el informe municipal que, en cumplimiento de su obligación, debería haber remitido a esta Procuraduría, pese a las reiteradas peticiones que le hemos realizado, al amparo de las facultades conferidas por el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y por la Ley 2/1994, de 9 de marzo, del Procurador del Común, con objeto de fijar



nuestra posición y, con ello, contribuir a la solución del problema que ha dado lugar a la queja, consideramos oportuno formular la siguiente **Resolución**:

- Que por parte de la Corporación municipal que V.I. preside se facilite, a la mayor brevedad posible, respuesta expresa al escrito presentado en relación con el tema que nos ocupa, ajustándose en adelante y respecto de las solicitudes que le presentan los ciudadanos a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

- Se proceda, por parte de los servicios municipales, a realizar las labores pertinentes de limpieza y adecentamiento del espacio a que se refiere la queja que ha dado lugar a este expediente, necesidad de limpieza y adecentamiento que no ha sido contradicho por V.I.; ello en cumplimiento de las competencias que en materia de prestación del servicio de limpieza de los espacios públicos atribuye a las entidades locales la normativa reguladora de la Administración local.

- Que en adelante cumpla con la obligación de auxiliar al Procurador del Común en sus investigaciones en los términos exigidos por los artículos 3.1 y 16 de la Ley 2/1994 de 9 de marzo.

Esta es nuestra resolución y así se la hacemos saber, con el ruego de que nos comunique de forma motivada la aceptación o no aceptación de la misma en el plazo de dos meses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley Reguladora de la Institución.

Una vez realizadas las comunicaciones oportunas, se acuerda publicar la presente Resolución en la página web de esta Institución, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.

Pendiente de sus noticias, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

EL PROCURADOR DEL COMÚN
Tomás Quintana López